

La derecha dura, o el poder real del país, está constituida por los intereses del agronegocio (soja y ganadería)¹ y el empresariado corrupto², y está representada en diferentes partidos del espectro político. Tiene sus expresiones en el PLRA que se encuentra en franco proceso de división, en la ANR por el momento tremendamente fragmentada, en el PUNACE que representa a los sectores de la ultraderecha más recalcitrante y en partidos menores como Patria Querida, PDP (Partido Demócrata Progresista) y otros. Además de los partidos, se expresa a través de los medios de comunicación corporativos que (por si acaso) acaban de crear la Asociación de Radiodifusoras del Paraguay (ARP también) para hacer una defensa del empresariado del sector.

Esta derecha está intensificando la virulencia de sus críticas hacia el gobierno, aspirando, como desde que subió Lugo, a llegar al juicio político. A los ataques que se iniciaron con el destape de los problemas de paternidad del presidente, le siguieron los casos de la compra de las tierras en San Pedro, el secuestro de Zavala y el hipotético vínculo Lugo/EPP, y a partir de inicios de febrero, en estos días, la supuesta incompetencia del gobierno en la provisión de los servicios eléctricos y de agua a la población. Hay ataques cotidianos en la prensa sobre aspectos menores que crean, o intentan crear en la ciudadanía, una reacción de hastío hacia el gobierno, preparando las condiciones subjetivas para el –por ellos ansiado– juicio político³.

A la vez, los sectores progresistas parecen haber encontrado el camino para una unificación, precaria (y por el momento, parcial) pero unificación al fin, que pone aún más nerviosa a la derecha. Debe reconocerse que este reagrupamiento está fuertemente tutelado por Lugo. Este nerviosismo se acentuó en las últimas semanas con nuevos nombramientos en Itaipú y Yacyretá que representaron un claro distanciamiento del titular del ejecutivo, del PLRA. Las periódicas reuniones de Lugo con la dirigencia del EUP refuerzan este ataque de nervios que por momentos parece convertirse directamente en histeria.

Otro elemento que mete presión al proceso de crecientes fricciones que se está viviendo, es sin duda el de las elecciones municipales de noviembre. La derecha política no encuentra la fórmula que le permita presentarse unificadamente⁴, y el sector progresista, como parte del ya mencionado reagrupamiento, se encuentra trabajando afanosamente en esta dirección. De hecho, esas elecciones marcarán un momento clave de lo que le espera al país en los próximos años. Si la izquierda no alcanza números significativos, el “luguismo” se desinflaría y habría derecha a partir del 2013. Si por el contrario, alcanza a expresarse con fuerza, sería el momento para que el “luguismo” plantee ya sin ambages la constituyente, que parece ser la condición necesaria para iniciar un proceso de cambio.

Esta aparente inclinación de Lugo a abandonar la estéril posición expresada en el “poncho jurúicha” e inclinarse hacia su base natural de apoyo, no está sin embargo para nada clara. Los sectores duros del ejecutivo siguen en manos de la derecha: el Ministerio de Hacienda, con una política estrechamente ajustada a las indicaciones de los organismos multilaterales representa una formidable barrera a cambios de alguna significación en la recaudación y

¹ Debe tenerse en cuenta que Lugo, por el momento, no ha afectado en lo más mínimo los intereses de estos sectores. De todos modos la UGP se encuentra expectante, pero al parecer prefiere no dar un respaldo explícito a la derecha política ya que esperan una buena cosecha y rendimientos en la zafra de soja de este año, y hasta tanto (la cosecha termina en abril) prefieren no hacer más olas.

² Con respecto a la corrupción, ésta aún no ha sido seriamente encarada.

³ Según opinión de algún analista, enero y febrero son meses en los que la derecha también se reagrupa, mantiene permanentes reuniones y elabora planes en Punta del Este, que empezarían a ser aplicados desde marzo.

⁴ Más allá de lo coyuntural, lo que existe en el fondo es que los partidos pro-sistema intentan reagruparse pero sin líneas ni liderazgos claros. O sea, en la derecha no logra consolidarse un grupo hegemónico que exprese políticamente la dominación.

asignación de recursos socialmente orientados⁵. Por su parte, el Ministerio del Interior⁶ es el brazo ejecutor de la política norteamericana de seguridad en la región y sigue a pie juntillas las indicaciones de los entrenados “especialistas” colombianos que rodean al ministro, ahora ya de manera permanente.

La derecha tiene también reaseguros importantes, decisivos podría decirse, en el Parlamento y en el Poder Judicial. En estas instancias se expresa constantemente la disposición de los conservadores de no aceptar las más mínimas reformas, sino por el contrario, avanzar en el perfeccionamiento de un Estado represor y neoliberal. Debe notarse al respecto, y esto es de mucha importancia, que el Poder Judicial ha ido adquiriendo en los últimos meses la clara función de guardián del sistema, crea cerrojos jurídicos que vuelven de hecho imposible cualquier modificación al status quo. Otra pieza central en este tablero de fuerzas es el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) que se encarga de preparar los *fraudes legales* en las elecciones. Debe tenerse en cuenta que la Junta Electoral está controlada por la derecha política. En suma, la correlación de fuerzas es absolutamente desfavorable para los cambios.

Por otro lado, puede afirmarse que el futuro del luguismo está íntimamente vinculado a la política social del gobierno. Pero la política social no cambió, la SAS en concreto, mantiene la vieja línea de asistencia focalizada de estilo Banco Mundial/BID que descansa en la relación Estado/Individuo impidiendo la relación Estado/Organizaciones sociales, carece de presupuesto y está atravesando un período de turbulencias internas. El Gabinete Social no logra dar pasos coordinados (con la excepción quizás de lo que cada uno por su lado, hacen el Ministerio de Salud y el de Educación). La reforma agraria está muerta y su deceso tiene que ver con la asfixia a la que fue sometida la CEPRA (Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria), también sin presupuesto y con escaso predicamento político. Las demás dependencias que forman la red de instituciones públicas de la política social, y los sectores progresistas que podrían apoyarla, no tienen una política definida, así como tampoco se pudo definir hasta ahora, una política económica alternativa a la del FMI.

Esta situación en la que se encuentra la política social es de incumbencia principal del Ejecutivo⁷ y es –como se dijo– clave para el avance político de los sectores progresistas, podría de hecho, definir los resultados de las elecciones de noviembre. Lugo parece ir dándose cuenta de esto. Al menos esto es lo expresado por él mismo en una reciente reunión cuando afirmó que el futuro es de los movimientos progresistas (y no de los partidos políticos).

Así las cosas, los desafíos de corto plazo que se le presentan a las fuerzas progresistas tienen que ver con la elaboración de una política económica y social diferente a la impuesta desde Washington y plantear simultáneamente una política de seguridad diferente a la enarbolada hoy por Filizzola basada en la represión, cuando aquella que conviene a la mayoría del país es una fundamentada en la prevención. Además de seguir fortaleciendo el proceso de unidad emprendido.

Febrero 2010

⁵ Un botón de muestra: “El Ministerio de Hacienda recortó los gastos especialmente de las Secretarías de Educación y Salud, la Presidencia de la República y las Gobernaciones, de acuerdo al plan financiero de la institución. El recorte para el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue de G. 23.733 millones; para el de Salud Pública, de G. 13.013 millones; y para la Presidencia, de G. 14.000 millones. Hacienda aprueba cada año un plan de gastos que se basa en los recursos disponibles, y no en los montos que aprobó el Congreso Nacional. El presupuesto total para este año llega a G. 11,8 billones, pero el plan financiero lo redujo a G. 11,5 billones”. (*Diario Última Hora – 11 de febrero de 2010*).

⁶ Cuyo titular se presentaría en el 2013 como vice en la fórmula F.Franco/R. Filizzola

⁷ Si bien, su financiamiento depende del Parlamento. Recientemente la ofensiva parlamentaria se está centrando en quitarle incluso al Ejecutivo la decisión sobre el destino de los fondos sociales de las binacionales, de donde se deduce la importancia asignada por la derecha a impedir el mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de tales políticas, con el consiguiente rédito político que de ello se desprendería.